

SEXTA SALA UNITARIA DE PRIMERA
INSTANCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA
ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE OAXACA.

EXPEDIENTE: 42/2018

ACTOR: XXXXXXXXXXXX

DEMANDADO: DIRECTOR DE
RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS Y
SITUACIÓN PATRIMONIAL DE LA
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y
TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL DEL
PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE
OAXACA.

OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA A VEINTIDOS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL
DIECIOCHO.-----

VISTOS, para resolver los autos del juicio de nulidad de número 42/2018, promovido
por XXXXXXXXXXXX en contra del SECRETARÍA DE LA
CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL, SUBDIRECCIÓN DE
RESPONSABILIDADES Y TRANSPARENCIA, DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDADES Y
SITUACIÓN PATRIMONIAL.-----

RESULTANDO:

1°.- Por escrito recibido el diecisiete de abril del dos mil dieciocho, en Oficialía de
Partes Común del Tribunal de Justicia Administrativa para el Estado de Oaxaca, XXX
XXXXXXXXXX, demandó la nulidad lisa y llana del contenido de la resolución de fecha
treinta y uno de enero del dos mil dieciocho donde se le impone la sanción de inhabilitación
por el periodo de nueve meses para desempeñar empleo, cargo o comisión al servicio del
Estado o Municipios, dentro del expediente 46/RA-B/2016.-----

2°.- Por auto de dieciocho de abril de dos mil dieciocho, se admitió a trámite la
demanda en contra del Director de Responsabilidades Administrativas y Situación
Patrimonial de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental del Poder
Ejecutivo del Estado; ordenándose notificar, emplazar y correr traslado a las autoridades
demandadas, para que produjera su contestación, apercibida que para el caso de no
hacerlo, se declararía precluido su derecho y se tendría por contestada la demanda en
sentido afirmativo, salvo prueba en contrario, se le tuvo a la parte actora ofreciendo las
siguientes pruebas: a) copia certificada de la resolución impugnada emitida el treinta y uno
de enero del dos mil dieciocho por el Director de Responsabilidades Administrativas y
Situación Patrimonial de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental del
Poder Ejecutivo del Estado, dentro del expediente de Procedimiento Administrativo
Disciplinario 46/RA-B/2016, documental con la que acredita los hechos 1, 2, 3 y 4 de su

DATOS
PERSONALES
PROTEGIDOS
POR EL
ARTÍCULO 116
DE LA LGTAIP
Y ARTÍCULO 56
DE LA LTAIPEO

DATOS

PERSONALES

PROTEGIDOS

POR EL

ARTÍCULO 116

DE LA LGTAIP

Y ARTÍCULO 56

DE LA LTAIPEO

demanda; b) Original del oficio número SCTG/SRAA/DRASP/PA-B/103/2018 emitido el dos de febrero del dos mil dieciocho por el Director de Responsabilidades Administrativas y Situación Patrimonial de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental del Poder Ejecutivo del Estado, dentro del expediente de Procedimiento Administrativo Disciplinario 46/RA-B/2016, acreditando el hecho 3 de su demanda y copia simple de su notificación; c) Copia simple de la cedula de notificación levantada el nueve de febrero del dos mil dieciocho, en la que asentó que se le notificó al actor el oficio número SCTG/SRAA/DRASP/PA-B/103/2018 y la resolución de fecha treinta y uno de enero del dos mil dieciocho dictado por el Director de Responsabilidades Administrativas y Situación Patrimonial de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental del Poder Ejecutivo del Estado, dentro del expediente de Procedimiento Administrativo Disciplinario 46/RA-B/2016, con el que acredita el hecho 3 de su demanda; d) Original del oficio número SCTG/SRT/DRSP/RA-B/507/2017 de fecha dieciocho de agosto del dos mil diecisiete, que contiene la trascripción dictado el dieciséis de agosto del dos mil diecisiete, dentro del expediente número 46/RA-B/2016 del índice de la Dirección de Responsabilidades y Situación Patrimonial, actualmente Dirección de Responsabilidades Administrativas y Situación Patrimonial de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental del Poder Ejecutivo del Estado, por el que ordenó el inicio de procedimiento administrativo en contra, por faltas administrativas cometidas como servidor público, con el que acredita el hecho 1 de su demanda; e) copia simple con sello original, del acta levantada el dieciocho de septiembre del dos mil dieciocho ("aunque equivocadamente se haya asentado dieciocho de agosto del dos mil dieciocho"), en la que consta el desahogo de la audiencia de Ley del expediente número 46/RA-B/2016 relativo al Procedimiento Administrativo Disciplinario, del índice de la Dirección de Responsabilidades y Situación Patrimonial, actualmente Dirección de Responsabilidades Administrativas y Situación Patrimonial de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental del Poder Ejecutivo del Estado, con la que acredita la prueba 2 de su demanda; f) original del acuse del escrito de fecha ocho de septiembre del dos mil diecisiete, mediante el cual contestó, ofreció pruebas y alegó lo que a su derecho correspondiera en la audiencia de ley, del expediente número 46/RA-B/2016 relativo al Procedimiento Administrativo Disciplinario, del índice de la Dirección de Responsabilidades y Situación Patrimonial, actualmente Dirección de Responsabilidades Administrativas y Situación Patrimonial de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental del Poder Ejecutivo del Estado, acredita el hecho 2 de su demanda; g) acuse de recibo del escrito de fecha doce de abril del dos mil dieciocho, mediante el cual solicitó al Director de Responsabilidades Administrativas y Situación Patrimonial de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental del Poder Ejecutivo del Estado, copia certificada del expediente de Procedimiento Administrativo Disciplinario 46/RA-B/2016; h) la instrumental de actuaciones; i) la presuncional legal y humana. -----

3º.- Mediante proveído de veintidós de mayo del dos mil dieciocho, se tuvo al Director Jurídico de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental Contestano la demanda en legal representación del Director de Responsabilidades y Situación Patrimonial de la misma Secretaría, haciendo valer sus excepciones y defensas, y por admitidas las siguientes pruebas : 1. Copia certificada de su nombramiento y toma de protesta de ley de fecha dieciséis de enero del dos mil diecisiete, expedido por el entonces Secretario de

DATOS
PERSONALES
PROTEGIDOS
POR EL
ARTÍCULO 116
DE LA LGTAIP
Y ARTÍCULO 56
DE LA LTAIPEO

los
s y
del
tivo
su
del
ero
dos
ción
der
ario
nero
que
del
es y
as y
al del
o en
ita el
iocho
ntado
cia de
rativo
onial,
de la
tado,
fecha
alegó
46/RA-
on de
dades
arencia
nda; g)
del cual
de la
Estado,
B/2016;

Director
stano la
trimonial
tidas las
le ley de
stario de

Administración del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca; 2. Copia simple de la resolución de fecha treinta y uno de enero del dos mil dieciocho, dictada por el Director de Responsabilidades Administrativas y Situación Patrimonial de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental en el expediente 46/RA-B/2016 (documental que obra en copia certificada en el expediente administrativo que exhibió la parte actora); 3. La Instrumental de actuaciones; 4. La presuncional legal y humana. Asimismo se cerró la etapa de instrucción y se señaló fecha de Audiencia Final. -----

4°.- El día siete de agosto del dos mil dieciocho, se llevó a cabo la Audiencia referida; a la que no comparecieron las partes ni persona alguna que legalmente los representará, abriéndose el periodo de desahogo de pruebas, mismas que se desahogaron por su propia naturaleza. En el periodo de alegatos se advirtió que la parte actora y la autoridad demandada presentaron escrito formulando alegatos, los cuales se agregaron para los efectos legales correspondientes; y se citó para oír sentencia misma que ahora se dicta. ---

CONSIDERANDO:

PRIMERO.- Competencia.- Esta Sexta Sala Unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca es competente para conocer del presente asunto en términos del Decreto Núm. 786, de la LXIII Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, mediante el cual se Reforman, Adicionan y Derogan diversas disposiciones de la Constitución Estatal; entre ellas la adición de un capítulo al Título Sexto, relativo a los Órganos autónomos, denominado " Del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca". Artículos 114 QUÁTER inciso B) fracción VII, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano del Estado de Oaxaca; que establece las atribuciones de este tribunal 118, 119 ,120 fracción I a la IV y 121 de la Ley de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado de Oaxaca, por tratarse de un juicio de nulidad promovido en contra de una autoridad de carácter estatal. -----

SEGUNDO. - Personalidad y Personería.- Quedó acreditada en términos de los artículos 148 y 151 de la Ley de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado, ya que el actor promueve por su propio derecho y la autoridad demandada mediante copia certificada de la toma de protesta al cargo. -----

TERCERO.- Fijación de la Litis .- Lo es el planteamiento que hace la parte actora de este juicio, sobre la ilegalidad de la resolución de treinta y uno de enero de dos mil dieciocho, emitida por el C. Director de Responsabilidades Administrativas y Situación Patrimonial de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca, al imponerle la sanción consistente en Inhabilitación para desempeñar empleo, cargo o comisión en el servicio público del Estado o municipio de Oaxaca por el periodo de nueve meses; por no haber cumplido con la máxima diligencia el servicio que le fue encomendado al haber omitido autorizar el pago mediante ministración de los recursos, en razón de que, no transfirió en su totalidad los rendimientos financieros generados al treinta y uno de diciembre de dos mil catorce del fondo a los servicios de salud de Oaxaca, por la cantidad de \$ 223,811.61 (Doscientos Veintitrés mil Ochocientos

DATOS

PERSONALES

PROTEGIDOS

POR EL

ARTÍCULO 116

DE LA LGTAIP

Y ARTÍCULO 56

DE LA LTAIPEO

Once pesos con 61/100 m.n.) durante su desempeño como Subsecretario de Egresos y Contabilidad en la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca; alegando que la misma carece de una debida fundamentación y motivación toda vez que omite la cita del precepto normativo que lo obliga en su carácter de Subsecretario de Egresos y Contabilidad en la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca a autorizar mediante pagos ministración de los recursos; de igual manera, que no existió omisión que sancionar, en atención a que no se encontraba en posibilidad material de realizar la acción cuya omisión se le atribuye. Con lo anterior, estima que la autoridad demandada transgrede el artículo 17 fracción V de la Ley de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado de Oaxaca. Pretendiendo la nulidad lisa y llana, en atención a que la mencionada resolución no reúne los elementos de existencia y validez que deben revestir los actos administrativos por lo que el actuar de la autoridad demandada es arbitrario y contrario a derecho. -----

Por otra parte, la autoridad demandada en su contestación manifestó, que la resolución impugnada, fue dictada conforme a derecho, respetando la garantía de audiencia, así como la debida fundamentación y motivación en términos de los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De igual manera, manifiesta que el hoy acto impugnado, fue emitido de conformidad con las facultades con que la misma cuenta para vigilar que la prestación de los servicios públicos, y verificar que sean de acuerdo a los principios de legalidad, transparencia, honradez e imparcialidad; en acatamiento a lo previamente establecido en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios del Estado de Oaxaca, por lo que con los argumentos lógico jurídicos descritos a lo largo de la resolución en estudio, sigue el artículo 17 fracción V de la Ley de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado de Oaxaca, de ahí que las expresiones de la parte actora son infundadas e improcedentes por lo que no debe declararse la nulidad lisa y llana de la Resolución impugnada, toda vez que la pretensión de la parte actora es contraria a derecho. -----

CUARTO.- Acreditación del Acto Impugnado.- El acto impugnado, es la resolución de fecha treinta y uno de enero del dos mil dieciocho y que puso fin al expediente administrativo 46/RA-B/2016, que obra en el presente expediente a foja 19 a 41 y que fue reconocido expresamente por la autoridad demandada en su contestación; por lo que aunado al hecho de que se le otorga pleno valor probatorio conforme al artículo 203 fracción I de la Ley que rige a este Tribunal, esta Sala tiene por acreditado el acto impugnado. -----

QUINTO.- Causales de Improcedencia y sobreseimiento. Considerando que son de orden público y de estudio preferente a cualquier otra cuestión de un estudio integral de las constancias que integran el expediente, se desprende que en el presente caso concreto no se actualizan causales de improcedencia ni sobreseimiento; consecuentemente, no se sobresee el juicio. -----

¹ ARTICULO 203.- "La valoración de las pruebas se hará de acuerdo con las siguientes reglas: I. Harán prueba plena la confesión expresa de las partes y los actos contenidos en documentos públicos, si en éstos últimos se contienen declaraciones de verdad o manifestaciones de hechos de particulares, y..."

SEXTO.- Estudio de FONDO.- Son esencialmente fundados los conceptos de impugnación esgrimidos por la parte actora, para pretender la Nulidad de la resolución de fecha treinta y uno de enero del dos mil dieciocho y que puso fin al expediente administrativo 46/RA-B/2016, toda vez que como lo aduce, la autoridad demandada no cita el precepto normativo que en el caso, estableciera la obligación que tuviese en su carácter de Subsecretario de Egresos y Contabilidad en la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca para autorizar los pagos mediante la ministración de los recursos en cuestión; y por la cual la autoridad demandada determinó su responsabilidad administrativa.

Se dice lo anterior, toda vez que de una lectura integral de los fundamentos y motivos en que se sustenta la resolución recaída al expediente administrativo 46/RA-B/2016 consistente en 549 fojas al que se le otorga valor probatorio pleno conforme al artículo 203 fracción I de la Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Oaxaca, se advierte que la responsabilidad administrativa que se le atribuyó en su calidad de Subsecretario de Egresos y Contabilidad en la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca, consiste en:

“NO HABER CUMPLIDO CON LA MAXIMA DILIGENCIA EL SERVICIO QUE LE FUE ENCOMENDADO AL HABER OMITIDO AUTORIZAR EL PAGO MEDIANTE MINISTRACIÓN DE RECURSOS, EN RAZÓN DE QUE, NO TRANSFIRIÓ EN SU TOTALIDAD LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS AL TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DE DOS MIL CATORCE DEL FONDO A LOS SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA, POR LA CANTIDAD DE \$223,811.61 (DOSCIENTOS VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS ONCE PESOS 61/100 M.N.)”

Dicha responsabilidad administrativa, (es decir la omisión, de cumplir con la máxima diligencia el servicio que le fue encomendado) la sustenta en el artículo 56, fracciones I, II, III, XXX y XXXV de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de Oaxaca:

Artículo 56.- Todo servidor público tendrá las siguientes obligaciones:

I.- Cumplir con la máxima diligencia el servicio que le sea encomendado, sea cual fuere el carácter de su nombramiento, designación o contratación y abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio indebido de un empleo, cargo o comisión;

II.- Formular y ejecutar legalmente, en su caso, los planes, programas y presupuestos correspondientes a su competencia, y cumplir las leyes y otras normas que determinen el manejo de recursos económicos públicos;

III.- Abstenerse de causar daños y perjuicios a la hacienda pública estatal o municipal o al patrimonio de cualquier Institución Pública, sea por el manejo irregular de fondos y valores estatales o municipales, o por irregularidades en la recaudación, administración, recepción, manejo, aplicación o ejercicio de recursos públicos de cualquier naturaleza u origen, sean concertados o convenidos por el Estado con la Federación o con sus Municipios;

XXX.- Cumplir y hacer cumplir con diligencia las instrucciones, requerimientos y resoluciones que reciba de la Contraloría, la Auditoría y los Órganos de Control Interno competentes;

XXXV.- Abstenerse, en ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas, de celebrar o autorizar la celebración de contratos o realizar pedidos relacionados con adquisiciones, arrendamientos, mantenimientos y enajenaciones de todo tipo de bienes, prestación de servicios de cualquier naturaleza y la contratación de obra

DATOS

PERSONALES

PROTEGIDOS

POR EL

ARTÍCULO 116

DE LA LGTAIP

Y ARTÍCULO 56

DE LA LTAIPEO

pública o de servicios relacionados con ésta o con quien desempeñe un empleo, cargo o comisión en el servicio público, o bien, con las sociedades de las que dichas personas formen parte, sin la autorización previa y específica de la Contraloría, la Auditoría o los Órganos de Control Interno competentes a propuesta razonada, conforme a las disposiciones legales aplicables del titular de la institución pública de que se trate. Por ningún motivo podrá celebrarse pedido o contrato alguno con quien se encuentre inhabilitado para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público;

Sin embargo, si bien en términos de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de Oaxaca, los citados servidores públicos tienen la obligación de cumplir con la máxima diligencia las atribuciones que les fueron conferidas, ello no implica que la aquí autoridad demandada, no tuviera de igual manera, la obligación de fundar y motivar debidamente sus determinaciones, máxime que se trata de una resolución que causa una afectación directa a la esfera jurídica y derechos humanos del accionante. De esa guisa, para que la hoy parte actora, estuviera en posición de omitir la realización de determinada acción, se entiende que de forma primigenia, debe existir una obligación de hacer y que por tratarse de un servidor público, dicha obligación, debe encontrarse citada de forma expresa en un dispositivo normativo vigente. Lo que en la especie, no acontece, pues como ya se dijo en ninguna parte de su resolución, la autoridad demandada cita el precepto normativo que obligara a ~~XXXXXXXXXXXX~~, en su calidad de servidor público mencionado, a transferir en su totalidad los rendimientos financieros generados al treinta y uno de diciembre de dos mil catorce del fondo a los servicios de salud de Oaxaca, inclusive la cantidad de \$223,811.61 (DOSCIENTOS VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS ONCE PESOS 61/100 M.N.). situación que trascendió en el sentido de la misma de treinta y uno de enero de dos mil dieciocho emitida por el Director de Responsabilidades y Situación Patrimonial, actualmente Director de Responsabilidades Administrativas y Situación Patrimonial, de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental- del Gobierno del Estado de Oaxaca, en perjuicio de la parte actora. -----

Al mismo tiempo, cabe considerar que el derecho administrativo sancionador, en cierta medida debe atender a principios del derecho penal como el de **tipicidad**, -que consiste esencialmente en la adecuación de la conducta a la descrita por la ley- resulta una obligación ineludible que la autoridad demandada especificara con precisión de donde nace la obligación de la parte actora, para transferir en su totalidad los rendimientos financieros como se ilustra con la Jurisprudencia P./J. 100/2006, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXIV, Agosto de 2006, visible a página 1667, Novena Época, de rubro y texto siguiente:

"TIPICIDAD. EL PRINCIPIO RELATIVO, NORMALMENTE REFERIDO A LA MATERIA PENAL, ES APLICABLE A LAS INFRACCIONES Y SANCIONES ADMINISTRATIVAS.

El principio de tipicidad, que junto con el de reserva de ley integran el núcleo duro del principio de legalidad en materia de sanciones, se manifiesta como una exigencia de predeterminación normativa clara y precisa de las conductas ilícitas y de las sanciones correspondientes. En otras palabras, dicho principio se cumple cuando consta en la norma una predeterminación inteligible de la infracción y de la sanción; supone en todo caso la presencia de una lex certa que permita predecir con suficiente



grado de seguridad las conductas infractoras y las sanciones. En este orden de ideas, debe afirmarse que la descripción legislativa de las conductas ilícitas debe gozar de tal claridad y univocidad que el juzgador pueda conocer su alcance y significado al realizar el proceso mental de adecuación típica, sin necesidad de recurrir a complementaciones legales que superen la interpretación y que lo llevarían al terreno de la creación legal para suplir las imprecisiones de la norma. Ahora bien, toda vez que el derecho administrativo sancionador y el derecho penal son manifestaciones de la potestad punitiva del Estado y dada la unidad de ésta, en la interpretación constitucional de los principios del derecho administrativo sancionador debe acudirse al aducido principio de tipicidad, normalmente referido a la materia penal, haciéndolo extensivo a las infracciones y sanciones administrativas, de modo tal que si cierta disposición administrativa establece una sanción por alguna infracción, la conducta realizada por el afectado debe encuadrar exactamente en la hipótesis normativa previamente establecida, sin que sea lícito ampliar ésta por analogía o por mayoría de razón."

En mérito de lo anterior, toda vez que la autoridad demandada omite citar el artículo específico que genera la obligación de ~~XXXXXXXXXX~~, a transferir en su totalidad los rendimientos financieros, cuya omisión sustenta la responsabilidad administrativa que se le atribuye, se concluye que en el presente caso concreto, se actualiza la falta e indebida fundamentación y motivación respecto a la responsabilidad administrativa atribuida a la parte actora. Ello se ilustra de mejor manera con la Tesis I.6o.A.33 A, emitido por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, Marzo de 2002, visible a página 1350, Novena Época:

"FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN, FALTA O INDEBIDA. EN CUANTO SON DISTINTAS, UNAS GENERAN NULIDAD LISA Y LLANA Y OTRAS PARA EFECTOS.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido de manera reiterada que entre las garantías de legalidad y seguridad jurídica previstas en el artículo 16 constitucional, se encuentra la relativa a que nadie puede ser molestado en su persona, posesiones o documentos, sino a virtud de mandamiento escrito de autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento, y dicha obligación se satisface cuando se expresan las normas legales aplicables y las razones que hacen que el caso particular encuadre en la hipótesis de la norma legal aplicada. Ahora bien, el incumplimiento a lo ordenado por el precepto constitucional anterior se puede dar de dos formas, a saber: que en el acto de autoridad exista una indebida fundamentación y motivación, o bien, que se dé una falta de fundamentación y motivación del acto. La indebida fundamentación implica que en el acto sí se citan preceptos legales, pero éstos son inaplicables al caso particular; por su parte, la indebida motivación consiste en que en el acto de autoridad sí se dan motivos pero éstos no se ajustan a los presupuestos de la norma legal citada como fundamento aplicable al asunto. En este orden de ideas, al actualizarse la hipótesis de indebida fundamentación y motivación del acto reclamado, tal circunstancia se ubica en el supuesto previsto en la fracción IV del artículo 238 del Código Fiscal de la Federación y, por tanto, la nulidad debe ser lisa y llana, pues lo contrario permitiría a la autoridad demandada que tuviera dos o más posibilidades de fundar y motivar su acto mejorando su resolución, lo cual es contrario a lo dispuesto en la fracción II del artículo 239 del Código Fiscal de la Federación, lo que implica una violación a las garantías de legalidad y seguridad jurídica consagradas en los artículos 14 y 16 constitucionales. En cambio, la falta de fundamentación consiste en la omisión de citar en el acto de molestia o de privación el o los preceptos legales que lo justifiquen; esta omisión debe ser total, consistente en la carencia de cita de normas jurídicas; por su parte, la falta de motivación consiste en la carencia total de expresión de razonamientos. Ahora bien, cuando se actualiza la hipótesis de falta de fundamentación y motivación del acto reclamado, tal circunstancia se ubica en el supuesto previsto en la fracción II del artículo 238 del Código Fiscal de la Federación y, por tanto, la nulidad debe ser para efectos, en términos de lo dispuesto en el párrafo final del numeral 239 del propio código."



Dicha omisión por parte de la autoridad demanda, resulta suficiente para determinar la nulidad lisa y llana de la resolución recaída al expediente 46/RA-B/2016 en términos del artículo 208 fracción III de la Ley de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado de Oaxaca procede determinar la NULIDAD LISA Y LLANA de la resolución que recayó al expediente administrativo; y en consecuencia la inhabilitación para desempeñar empleo cargo o comisión por el periodo de nueve meses. -----

Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 207, 208 fracción III y 209 de la Ley de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado de Oaxaca, se; -----

RESUELVE:

PRIMERO.- Esta Sexta Sala Unitaria fue competente para conocer y resolver del presente asunto. -----

SEGUNDO.- La personalidad y personería de las partes quedó acreditada en autos.- -

TERCERO.- No se actualizaron causales de improcedencia y sobreseimiento hechas valer por la autoridad demandada. -----

CUARTO.- Se declara la NULIDAD LISA Y LLANA de la resolución de fecha treinta y uno de enero del dos mil dieciocho que recayó al expediente administrativo, 46/RA-B/2016 y en consecuencia la inhabilitación para desempeñar empleo cargo o comisión por el periodo de nueve meses. -----

QUINTO.- NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE AL ACTOR Y POR OFICIO A LA AUTORIDAD DEMANDADA, con fundamento en los artículos 172 fracción I y 173 fracciones I y II, de la Ley de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado de Oaxaca.- **CÚMPLASE.** -----

Así lo resolvió y firmó el Titular de la Sexta Sala Unitaria de Primera Instancia del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca, Magistrado Abraham Santiago Soriano, quien actúa ante el Licenciado Christian Mauricio Morales Morales, Secretario de Acuerdos, que autoriza y da fe.-----

R. FERRER
AV. ALVARO
NO. 70
OL. REFO
OAXACA
JUARE
OAXAC
C.P. 681

EXT. 101
JUSTICIA
ADMINISTRATIVA
DEL
ESTADO DE
OAXACA
PRIMERA
INSTANCIA
SALA
UNITARIA

y Ju
I
A L/
fracc
de O